

# ➤ El 'efecto boomerang' de la cocaína: Cadenas de mercancías y los orígenes de la crisis mexicana

Paul Gootenberg<sup>1</sup>

**D**etrás de los titulares sensacionalistas, del pánico en términos de seguridad nacional, y de las sombrías estadísticas de seis años de horrenda violencia relacionada con las drogas a lo largo de la frontera entre México y los EE.UU., yace una historia sembrada de efectos no deseados, referida a los enredos de las políticas estadounidenses sobre drogas a lo largo del hemisferio. En lugar de examinar la capacidad o incapacidad del sistema para reformarse, analizaré aquí los cambios históricos en las "cadenas productivas" de drogas que, junto con políticas defectuosas, ayudaron a provocar la crisis actual en México.

Bajo crecientes presiones de los EE.UU., hacia la década de 1950, la cocaína —que alguna vez fue una minúscula industria benigna y legal localizada en un rincón distante de los Andes— se convirtió en una droga ilícita. Al norte, ello alimentó el dramático auge de los "cárteles" colombianos durante la década de 1980. Hacia mediados de la década de 1990, presiones adicionales de los EE.UU. impulsaron el rentable negocio al mayoreo de la droga hacia el norte, en dirección a México —en lo que fue el preludio de la actual confrontación entre los capos de la droga y el Estado mexicano. La mitad del consumo recreacional de cocaína en el mundo se concentra aún en los Estados Unidos, país donde los desembolsos para adquirir la costosa droga constituyen la mitad de los aproximadamente US \$80 mil millones que se gastan anualmente en drogas ilegales. Dado el asombroso crecimiento histórico de la oferta de la droga (la cual se multiplicó por diez durante el auge experimentado en la década de 1980), no resulta sorprendente que el precio de venta al menudeo de la cocaína haya caído en picada de manera casi continua desde la década de 1970, mientras los contrabandistas consiguen burlar los crecientes costos causados por acciones de interdicción, así como los derivados por la competencia generada por la prima de riesgo de la prohibición. El brote de la guerra contra las drogas en México en 2007 brindó la única tregua a esta tendencia. Esta dramática caída de los precios es el exacto opuesto del propósito declarado por el jefe de la DEA, que consistía en impulsar los precios de las drogas al alza y fuera del alcance de los consumidores casuales o adictos en su país.

---

<sup>1</sup> Nota: Circulan muchas versiones de este documento; esta versión fue editada inicialmente por Fred Rosen para ser presentada al Foro LASA en la primavera de 2011. Mi estudiante para el doctorado en filosofía, Froylán Enciso, colaboró con los temas relacionados a México.

## DE LA INDUSTRIA LEGAL A LA ILÍCITA

El auge de la cocaína en los Andes durante fines del siglo XX se basó en los vestigios de una economía legal de la cocaína, que le legaron sus técnicas y sus primeras redes ilícitas.<sup>2</sup> La producción de cocaína, principalmente para usos anestésicos y otros medicinales, atravesó dos fases: primera, su construcción como una mercancía para exportación (1885-1910); y segunda, su pronunciada contracción entre 1910 y 1948, debido a la competencia colonial asiática, la reducción de su uso medicinal, y el impacto de las primeras campañas de los EE.UU. y la Liga de Naciones para restringir los “estupefacientes”. En un cambio dramático, después de 1905, los Estados Unidos –ávidos impulsores de las drogas— se convirtieron en su militante enemigo global, y los primeros funcionarios estadounidenses encargados de este tema predicaron la erradicación universal de las drogas en sus puntos de origen. Pero no fue sino hasta la década de 1940 que, pese a un creciente impulso informal en la región andina, los EE.UU. pudieron convencer o engatusar a los países productores respecto a las maléficas propiedades de la cocaína. La industria peruana, que consistía en el procesamiento de la hoja de coca en pasta básica de cocaína (PBC), se contrajo a un centro neurálgico ubicado en la región centro-oriental andina de Huánuco, cerca al valle del Alto Huallaga.

Esta cultura precursora de la droga ostentaba tres legados. En primer lugar, la cocaína legal constituía mayormente una industria pacífica, a excepción de la ligera coerción local relacionada al trabajo agrícola. En segundo lugar, las economías de la cocaína legal como la peruana no engendraron redes de contrabando a través de fronteras –aún cuando los placeres recreativos de la “cocaína” eran ampliamente apreciados. Entre 1910 y 1945, prevalecía un mundo multipolar de la cocaína, donde algunas naciones como los Estados Unidos prohibían y congelaban el consumo no medicinal de la cocaína, mientras que otros países fabricaban o toleraban la droga abiertamente. Esta diversidad de regímenes no generaba incentivos para la existencia de un mercado negro o una competencia violenta. En tercer lugar, este negocio marchito y anticuado sobrevivía como base de la vida regional del remoto Huánuco, que se convirtió en el último bastión en el mundo de las tradiciones de fabricación de cocaína después de la Segunda Guerra Mundial.

Después de la guerra, cuando los Estados Unidos emergieron como la potencia mundial indiscutible en asuntos de drogas, sus ideales de erradicación se magnificaron a través de las nuevas agencias de las NN.UU. que se ocupaban de estas sustancias, como la Comisión de Estupefacientes (CND, siglas en inglés). Apoyados por una ola de dóciles regímenes latinoamericanos durante la Guerra Fría, la Agencia Federal de Estupefacientes (FBN, siglas en inglés) y el Departamento de Estado finalmente estaban a punto de conseguir su largamente acariciada meta de criminalizar la cocaína (y, en el papel, incluso la hoja de coca en los Andes) –lo que ocurrió en el Perú ello ocurrió hacia 1948, y en Bolivia hacia 1961.

El efecto inmediato de la criminalización total de la cocaína– y de una campaña secreta de la FBN contra la cocaína andina lanzada en 1947—fue el nacimiento y expansión de un circuito ilícito de la cocaína. Geográficamente, el tráfico de cocaína era una actividad que tenía lugar en los estamentos bajos de la sociedad, donde modestos “químicos”, contrabandistas y propietarios de clubes se vinculaban a través de diversos círculos sociales para establecer una red de nuevos espacios para consumo de drogas y estaciones de tránsito a través de Sudamérica y el Caribe. No era una operación a cargo de cárteles ni de la mafia internacional. A inicios de la década de 1960, una nueva y robusta clase social formada por campesinos involucrados en el cultivo de coca ilícita se unió a estos traficantes cada vez más escurridizos y experimentados. Los campesinos de la sierra, marginalizados durante la “década del desarrollo” auspiciada por los EE.UU. en la década de 1960, empezaron a migrar en masa a las zonas bajas en Bolivia y el Perú, atraídos por el espejismo de la carretera amazónica y los proyectos de modernización. La combinación de una clase de contrabandistas con un sector de campesinos proveedores dio como resultado la expansión incontenible de la cocaína en las décadas siguientes.

<sup>2</sup> Este enunciado proviene de mi trabajo *Andean Cocaine: The Making of a Global Drug* [Cocaína Andina: La Creación de una Droga Global] (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2008).

El clima político de la Guerra Fría franqueó el surgimiento de la cocaína.<sup>3</sup> La droga ilícita vio la luz en 1948-49 en la zona oriental del Huallaga en el Perú, cuando el régimen derechista y pro-EE.UU. del General Manuel Odría aplicó medidas enérgicas contra las últimas fábricas de cocaína que quedaban en el país, encarcelando a los fabricantes de la droga (quienes fueron catalogados como subversivos) y expulsando a los demás a espacios clandestinos. La técnica selvática de procesamiento que pasó a manos ilícitas fue la de la pasta básica de cocaína, que los campesinos adoptaron fácilmente con insumos químicos de bajo costo como kerosene y cemento. A inicios de la década de 1950, los contrabandistas transportaban PBC a los lugares donde se la refinaba en clorhidrato de cocaína (HCl) a través de dos principales cadenas de transbordo: una vía caribeña a través de La Habana (punto neurálgico regional de mafiosos atraídos por los dólares y la corrupción); y la otra vía, por el norte de Chile, donde los clanes de Valparaíso movilizaban la cocaína hacia la costa oeste a través de guaridas ubicadas en Panamá y México. Mientras tanto, las medidas de mano dura respaldadas por los EE.UU. contra la cocaína en el Perú, acompañadas por la falta de autoridad a nivel local y la influencia de los EE.UU. en una Bolivia revolucionaria, condujeron a que la PBC se difundiera rápidamente hacia este último país. De este modo, Bolivia se convirtió en el lugar clave para la incubación de la droga durante la década de 1950, en docenas de pequeños “laboratorios” dispersos en ese territorio. A inicios de la década de 1960, la cocaína ya se encontraba en todo el hemisferio, con prósperos espacios de consumo y rutas a lo largo de Argentina y Brasil, y nuevos consumidores en ciudades estadounidenses como Nueva York. Dos sucesos de la Guerra Fría consolidaron la presencia de la cocaína. El primero, la revolución de Fidel Castro en Cuba en 1959, supuso la expulsión de La Habana de los traficantes, quienes llevaron consigo sus habilidades y contactos en dirección a Sudamérica, México y Miami. Estos exiliados formaron la primera clase de traficantes profesionales de cocaína. En segundo lugar, las acciones de los EE.UU. para controlar al endeble Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Bolivia llevaron, hacia 1961, a la campaña antidrogas conjunta realizada en ese país (así como a un tránsito hacia un gobierno militar de corte conservador en 1964). Ello impulsó a miles de campesinos en dirección a las remotas y dinámicas fronteras de cultivo de coca en las tierras bajas del Chapare, Santa Cruz y el Beni.

Mientras tanto, los Estados Unidos, cuyas autoridades se preocupaban calladamente sobre su incapacidad para poner alto a la nueva droga, apoyaron una andanada de reuniones secretas de alto nivel sobre acciones de patrullaje, visitando misiones de las NN.UU. sobre las drogas, y realizando incursiones con la INTERPOL. Todas estas medidas represivas dispersaron más aún la droga y endurecieron a sus nuevos contrabandistas. Sin embargo, hacia fines de la década de 1960, el auge de los regímenes militares de “autoritarismo burocrático” respaldados por los EE.UU. en países como Brasil y Argentina, llevaron la trayectoria de larga distancia de la cocaína a través de un lugar: la única democracia viable del continente, Chile. Aquí, el quiebre de los clanes de la década de 1950 generó muchos exportadores que competían entre sí, vinculados a una amplia oferta de pasta básica de cocaína procedente de Bolivia y, una vez más, del Perú.

## **AUGE Y CAÍDA DE LOS CÁRTELES COLOMBIANOS, 1973-95**

Antes de la década de 1970, Colombia no jugaba un papel sistemático en las industrias de la cocaína en Sudamérica, aunque el país contaba con una tradición de empresarios y contrabandistas regionales, participaba en la exportación de marihuana desde la costa del Caribe, y ostentaba un legado de violencia cotidiana desde la década de 1950. El giro de las políticas de la cocaína hacia Colombia se produjo durante la era de Nixon (1969-74).

Dos eventos más, relacionados a la Guerra Fría, impulsaron la presencia geográfica de la cocaína hacia el norte. El primer hecho, relacionado a las políticas anticomunistas de Nixon, fue el golpe de Estado castrense perpetrado en Chile por el General Augusto Pinochet en setiembre de 1973. Hacia 1970, algunos traficantes

<sup>3</sup> P. Gootenberg, “The ‘Pre-Colombian’ Era of Drug Trafficking in the Americas: Cocaine, 1947-1965” [La Era “Pre-Colombiana” del Tráfico de Drogas en las Américas: Cocaína, 1947-1965], *The Americas*, 64/2 (2007), 133-76.

colombianos de bajo nivel servían como “mulas” para los chilenos. Pinochet, para agenciarse el favor de Washington y de la recientemente formada DEA, lanzó a fines de 1973 una campaña contra los traficantes chilenos, la mayoría de los cuales fueron rápidamente encarcelados o expulsados del país. El impacto de esta medida fue impulsar rápidamente al norte la ruta de la pasta básica de coca elaborada por campesinos del Huallaga y de Bolivia, a través del pueblo fronterizo amazónico de Leticia, hacia Colombia. Los contrabandistas pioneros de Medellín, como Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, reestructuraron la industria y expandieron dramáticamente su dimensión y alcance. El segundo suceso político fue la declaración de la “guerra” contra las drogas por parte de Nixon en 1969, orientada principalmente contra la marihuana (es decir, contra la cultura anti-bélica juvenil estadounidense de la década de 1960) y la heroína (que era temida entre los veteranos de la guerra de Vietnam, y que operaba como chivo expiatorio para la ola de delincuencia “negra” que azotaba las ciudades estadounidenses).<sup>4</sup> Las enérgicas campañas contra estas drogas –las redadas de la Operación Interceptación de 1970 en la frontera con México, y la campaña contra la Conexión Francesa que transportaba heroína– propiciaron una perfecta ventana al mercado de cocaína procedente de los Andes. Este producto ingresó a la cultura estadounidense de la década de 1970 como una “droga blanda”, glamorosa y costosa. La cocaína resultaba más fácil, segura y lucrativa de esconder, y los proveedores de marihuana desde Colombia hasta México rápidamente cambiaron sus líneas de productos.

Mucho se ha dicho sobre los “cárteles” colombianos, nombre oficial pero poco apropiado para tan robustas empresas regionales y familiares. Una vez llevada a Colombia, la cocaína prosperó en lugares como Medellín, ciudad colombiana que mostraba un declive comercial.<sup>5</sup> Empresarios como Escobar, Ochoa y Carlos Ledher aprovecharon las rutas de transporte de mercaderías al por mayor a través de las islas del Caribe, la presencia de trabajadores colombianos en lugares como Miami y Queens, y la demora por parte de la DEA para prestarles atención durante la década de 1970, pues la agencia consideraba que la cocaína era un vicio de personas ricas. Para 1975, el tráfico colombiano superaba el nivel de 4 toneladas y, para la década de 1980, ingresaron a los Estados Unidos unas 100 toneladas de cocaína. Los exportadores se concentraron en tres grupos regionales: Medellín, Central (Bogotá), y Cali (del Valle) – la última era una bulliciosa nueva ciudad cerca al puerto de Buenaventura en el Océano Pacífico, promovida por clanes como los Rodríguez-Orejuela y Herreras. Sin embargo, hasta inicios de la década de 1990 y bajo el carismático liderazgo de Escobar, Medellín manejaba cerca del 80 por ciento del tráfico, que consistía mayormente en pasta básica de cocaína elaborada en la región peruana del Huallaga.

Hacia mediados de la década de 1980, la cocaína contaba con unos 22 millones de consumidores en los EE.UU. Precios escalonados y mercados con descuentos asignados con criterios raciales (como el del “crack”), junto a la creciente aura de violencia de la droga, transformaron a la cocaína en la droga más maléfica a los ojos de quienes libraban la guerra contra estas sustancias en los EE.UU. Bajo el gobierno de los presidentes republicanos Reagan y Bush (padre), esta extendida histeria alrededor de la cocaína llevó a una aguda militarización de las campañas en el extranjero contra el cultivo del arbusto en los Andes. Resultaba difícil encontrar aliados estatales confiables entre los tolerantes regímenes de Perú, Colombia y Bolivia (especialmente durante el tristemente célebre narco-gobierno de García Meza a inicios de la década de 1980). Durante la década de 1980 el escalamiento de las medidas hemisféricas de interdicción en el Perú (con asistencia militar directa y bases de asesoría en la región del Huallaga), Bolivia (con la Operación Alto Horno y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural [UMOPAR] entrenada por los EE.UU.), Colombia (mediante el pacto de extradición forzosa firmado a fines de la década de 1980), y Panamá (que llegó a su clímax en 1989 con la invasión para derrocar a su ex-aliado Manuel Noriega) fracasó en su intento por reducir el tráfico de cocaína. Ocurrió exactamente lo opuesto: las presiones de los EE.UU. produjeron un mejor ocultamiento y mayor pericia empresarial por parte de los

4 Michael Massing, en *The Fix* [El Arreglo] (Nueva York: Simon and Schuster, 1998), sostiene que las políticas de Nixon estaban “dando resultados”. Yo argumentaría que dichas políticas funcionaron en el largo plazo para engendrar el posterior auge de la cocaína en los EE.UU.

5 Mary Roldán, “Cocaine and the ‘miracle’ of modernity in Medellín”, [Cocaína y el “milagro” de la modernidad en Medellín], capítulo 4, en P. Gootenberg, ed., *Cocaine: Global Histories* [Cocaína: Historias Globales] (Nueva York: Routledge, 1999), pp. 165-178.

traficantes; llevaron a la duplicación de la coca procedente de la Amazonía entre 1982 y 1986 (como una manera de asegurar las cosechas contra lotes que resultaban capturados); y provocaron una caída precipitada del precio de mayorista de la droga, de US \$60,000 a US \$15,000 por kilo, en el transcurso de la década.

En la medida en que crecía la competencia, y mientras la participación monetaria se elevaba a millones de dólares por cargamento, los colombianos recurrieron a la violencia estratégica, en contraste con el tráfico de antaño. Los colombianos utilizaron a sicarios contra sus rivales cubanos remanentes y, a inicios de la década de 1980, la ciudad de Miami se vio plagada de batallas territoriales entre variopintas bandas rivales de “vaqueros de la cocaína”. En Colombia, el uso de la violencia siguió siendo una herramienta para proteger la impunidad contra la policía y los informantes, aunque por lo general los sobornos resultaban suficientemente efectivos en este sentido. La clase de traficantes de tipo empresarial buscó inicialmente obtener una legitimidad más amplia: postulando a cargos públicos (Escobar fue Senador de la República durante un breve período por el partido Alternativa Liberal), financiando elecciones, ofreciendo treguas estratégicas o apoyo fiscal al Estado, llevando a cabo obras públicas para el bien común. Pero una combinación de presión de los EE.UU. y ansiedad por parte de los ciudadanos colombianos respecto a una “narco-infiltración” del Estado, llevó a una descomposición política a mediados de la década de 1980. Después de 1984, se fue desvaneciendo la impunidad de los traficantes de drogas (empezando con la expulsión de Escobar del Congreso por gestión del Ministro de Justicia Lara Bonilla), y los traficantes contraatacaron con un aluvión de agresiones simbólicas y reales contra el Estado: atentados terroristas con bombas, secuestros y asesinatos (de jueces, candidatos a cargos públicos y periodistas), llegando hasta el descarado asesinato del propio Lara Bonilla. Colombia, ya inundada por la violencia política (incluyendo una creciente ola de guerrillas y paramilitares), se convirtió en la capital mundial del asesinato.<sup>6</sup> Entre 1980 y 1990, los homicidios en Medellín se dispararon a su nivel máximo, yendo de 730 a 5,300 al año, anticipando la tragedia contemporánea de Ciudad Juárez en México.

Si existe alguna lección para México hoy en día, es que en realidad la guerra contra el cártel colombiano de Medellín a inicios de la década de 1990 no funcionó. La guerra principalmente alteró el centro de gravedad de la cocaína, llevándolo desde esa ciudad sitiada hacia operaciones rivales en Cali, y muchos observadores interpretan la campaña como una alianza tácita del Estado colombiano y los traficantes de bajo perfil en Cali, en contra del avezado Escobar. Tal como lo ha demostrado el criminólogo Michael Kenney, en última instancia, la intervención de los EE.UU. en Colombia durante la década de 1990 resultó en el surgimiento de organizaciones más eficientes para el tráfico de drogas.<sup>7</sup> Actualmente, Colombia alberga alrededor de 600 redes camufladas de exportación, los llamados cartelitos “boutique”, los cuales se han diversificado con estrategias globales de venta (Brasil, África, Europa), han incursionado en drogas complementarias, y recurren a alta tecnología en sus operaciones, con acciones de contra-inteligencia y coca manipulada genéticamente.

Otras dos medidas represivas alteraron la trayectoria de la cocaína. En primer lugar, durante inicios y hasta mediados de la década de 1980, y alarmados por la visible intensidad del tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia de las bandas en el Condado Dade —el principal punto de ingreso para la cocaína colombiana—, la DEA y los agentes federales enfocaron las acciones de interdicción en la costa sur de Florida. El Comando Conjunto de Florida, organizado al estilo militar, y campañas como la “Operación Pez Espada”, centralizaron más de 2,000 agentes encabezados por el entonces Vice-Presidente Bush. Hacia fines de la década de 1980, los colombianos se estaban retirando del corredor del Caribe. Una redada contra su principal transportista en 1992 fue la gota que derramó el vaso para los exportadores de Cali, quienes recurrieron al transbordo alternativo a través de Panamá, América Central, y poco después, a través del norte de México, en un esquema negociado por el hondureño Juan Matta Ballesteros.<sup>8</sup> Las drogas provenientes del Caribe se filtraban sólo

6 Robin Kirk, *More Terrible Than Death* [Más Terrible que la Muerte] (Nueva York: Public Affairs Books, 2003).

7 Michael Kenney, *From Pablo to Osama: Trafficking and Terrorist Networks, Government Bureaucracies, and Competitive Adaptations* [De Pablo a Osama: Redes del Tráfico de Drogas y del Terrorismo, Burocracias Gubernamentales y Adaptaciones Competitivas] (University Park: Penn State University Press, 2007).

8 Ron Chepesiuk, *Drug Lords: The Rise and Fall of the Cali Cartel* [Capos de la Droga: Auge y Ocaso del Cártel de Cali] (Preston: Milo Books, 2003); Stan Zimmerman, *A History of Smuggling in Florida* [Una Historia del Contrabando en Florida] (Stroud: History Press, 2006), capítulo 8.

a través de Haití, el “Estado fallido” más cercano a las fronteras de los EE.UU. (especialmente después del derrocamiento de Aristide), y que se encontraba en manos de unas fuerzas armadas de la era de Duvalier. Las incursiones de la década de 1980 contra la cocaína colombiana en Florida desencadenaron el efecto no deseado de impulsar a los emergentes capos de la droga mexicanos.

El segundo cambio ocurrido a fines de la década de 1990 provino de los triunfos pírricos contra campesinos e intermediarios en la región oriental del Perú y en Bolivia, que resultaron en el traslado de la coca a Colombia. Durante mediados de la década de 1990, presiones de los EE.UU. sobre regímenes dóciles, llevaron finalmente a visibles reducciones de los cultivos de coca en los Andes. En el Perú, el régimen autoritario de Fujimori, alarmado por la lucrativa alianza del movimiento subversivo Sendero Luminoso con los cocaleros asediados en la región del Huallaga, adoptó estrategias militaristas de supresión, incluyendo una política de derribar avionetas que cortó el puente aéreo de la cocaína hacia Colombia. En Bolivia, el Plan Dignidad financiado por los EE.UU. finalmente redujo de manera drástica las exportaciones de pasta básica de cocaína; sin embargo, esta acción arrastraría consigo el movimiento campesino militante que en 2005, como resultado político no deseado, impulsaría a la Presidencia de la República al líder cocalero nacionalista Evo Morales. Empero, estas victorias temporales simplemente llevaron el cultivo de coca a Colombia, un país con escasa tradición nativa de la hoja, concentrando de esta manera una floreciente actividad agro-industrial verticalmente integrada de la cocaína en Colombia hacia fines de la década de 1990.

## **OPORTUNIDADES APROVECHADAS EN MÉXICO, 1985-2000**

Desde mediados de la década de 1990, la ubicación más rentable para el sendero de la cocaína hacia los Estados Unidos ha serpenteado mil kilómetros hacia el norte: a la frontera de los EE.UU. con México, adyacente al mercado estadounidense. Ésta fue la antesala a la guerra contra las drogas en México que se produjo a partir del año 2007.

El contrabando de drogas en localidades fronterizas como Tijuana, Nogales y Juárez, data de principios de siglo: empezó con drogas sin receta, alcohol, pasando luego a opiáceos y finalmente a marihuana. Hacia la década de 1970, la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, era la renombrada capital de la industria mexicana de la droga, y los narcotraficantes aún tenían su origen en las rústicas clases bajas del norte, si bien estaban alineados y bajo la tutela de décadas de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto con empresarios y políticos regionales. Hacia 1989, una tercera parte de la cocaína para el mercado estadounidense ingresaba a través de México; hacia 1992, ese volumen llegaba a la mitad del total, y a fines de la década, alcanzaba un 75 a 85 por ciento.<sup>9</sup> A mediados de la década de 1990, el ingreso generado por las exportaciones de drogas en México, lideradas por el repentino incremento de la cocaína, oscilaba entre US \$10 mil millones (según las autoridades estadounidenses) y US \$30 mil millones (estimados de los mexicanos). Este monto superaba por mucho el ingreso generado por la exportación de la mercancía legal más importante del país, petróleo (\$7.4 mil millones).

Este traslado a México fue el resultado no deseado de la represión sobre el cártel de Medellín en la década de 1980, mediante acciones de interdicción contra los corredores aéreos y marítimos de Florida. Cali tomó la iniciativa, recorriendo rápidamente América Central en busca de alianzas con traficantes mexicanos de la región del Pacífico, quienes introducían el producto a través de la frontera cobrando una comisión basada en el peso de la carga. Los decididos mexicanos, como el pionero Félix Gallardo de Sinaloa, ganaron pronto influencia sobre los asediados colombianos mediante la implementación de nuevos mecanismos —como una participación de pago en especie— que multiplicaron sus ganancias entre cinco y diez veces más, así como

<sup>9</sup> Luis Astorga, “Mitología del ‘narcotraficante’ en México” (México: Plaza y Valdés, 1995); Peter Andreas, *Border Games* [Juegos de Fronteras] (Ithaca: Cornell University Press, 2<sup>da</sup> edición, 2009), capítulo 4.

recurriendo a bandas chicanas para vender el producto al por menor en los Estados Unidos. Hacia inicios de la década de 1990, según la DEA, el cártel de Sinaloa superaba el Pico de ganancias del Cartel de Medellín, y después del año 2000, pasaron a desbordar completamente a los colombianos, realizando adquisiciones directamente de los distantes campesinos en la región peruana del Huallaga, y operando puntos de venta en lugares como Argentina. Otras fuerzas magnificaron el papel de la cocaína: la “década perdida” de 1980 por el colapso económico en México, el prolongado declive del PRI original, la transformación de ciudades fronterizas como Juárez y Tijuana en metrópolis desbordadas, y el auge del comercio fronterizo con el Tratado Norteamericano de Libre Comercio firmado en 1994.

Producto de la exposición que siguió al “caso Camarena” en 1985 (el asesinato de un agente de la DEA, que puso de manifiesto la complicidad de las autoridades en el tráfico de drogas), los contrabandistas de Sinaloa se dispersaron, escindiéndose en una serie de “cárteles” regionales alimentados por las nuevas súper-ganancias de la cocaína. Esta proliferación geográfica de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas atravesó el norte desde Sinaloa hasta las bases en Tijuana y Juárez, y llegó por el este hasta Matamoros y Reynosa, así como a puntos de tránsito en todo el país.<sup>10</sup> Tal como había ocurrido en Colombia, sucesivas redadas antidrogas desde 1970 resultaron en el fortalecimiento de empresas innovadoras, en tanto servían para eliminar a los operadores más débiles e ineficientes, y promovían una estructura favorable a empresas verticales. La transición al Cártel de Juárez (fundado por magnates del sector inmobiliario y por la policía federal) empezó a mediados de la década de 1980, con la base para transbordo de cocaína de Pablo Acosta en Ojinaga, Chihuahua, que movilizaba aviones de carga hacia y desde Colombia. Amado Carrillo Fuentes, quien luego se convertiría en el hombre más rico de México y el traficante más representativo de la era de Salinas en la década de 1990, amplió esta operación poco después.

Tal como había ocurrido en Colombia respecto a la competencia entre Medellín y Cali durante la década de 1990, los grupos de Juárez explotaron la campaña lanzada por el gobierno contra los traficantes de Sinaloa a partir de 1985, llegando a ocupar la punta de la pirámide del tráfico de drogas en México. Félix Gallardo dispersó a sus hombres por todo el noroeste hasta que fue encarcelado en 1989, y las organizaciones rivales se desarrollaron a partir de los socios regionales que evolucionaron o se separaron del Cártel de Sinaloa, como los hermanos Arellano-Félix de Tijuana. El Cártel de Matamoros o “del Golfo” ganó terreno en la medida en que el Estado mexicano escalaba el conflicto y pasaba a concentrarse en los traficantes de Juárez. Y, en un sorprendente ejemplo de efectos no deseados, las fuerzas del Golfo reclutaron a los “Zetas” – implacables ex-integrantes de un escuadrón antidrogas entrenado en los EE.UU., quienes luego se dedicarían a trabajar por su cuenta a lo largo del país desde el año 2003.

Hacia la década de 1990, la impresionante suma de miles de millones de dólares producto del tráfico de cocaína, expuso y socavó la tradicional colusión política del Estado mexicano con los traficantes regionales de drogas. Proveniente de secuelas de la Revolución de 1910, a partir de 1940 este fenómeno se consolidó en un manejo de violencia y rivalidades, orientado a la distribución de ganancias entre el Estado y la mafia de Sinaloa. Tras las dudosas elecciones de 1988, los Estados Unidos modificaron su apoyo al régimen autoritario en México con el fin de incluir la eliminación de las drogas, así como para incorporar nuevas oportunidades de comercio. El gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari (1988-94) encarnaba el doble filo de las políticas de drogas. Por un lado, Salinas, quien buscaba restaurar la imagen de México con ocasión de la firma del Tratado Norteamericano de Libre Comercio, asumió un activo papel a nivel nacional en la guerra contra las drogas liderada por los EE.UU., creando instituciones inter-agencias de patrullaje, basadas en el modelo de la DEA estadounidense. La Procuraduría General de la República (PGR) de México se convirtió en una burocracia antidrogas profesional. El enfoque se endureció también en el lado estadounidense de la frontera, la cual fue

---

10 Froylán Enciso ayudó a desenmarañar la geografía de los cárteles; también coeditamos una edición de *NACLA Reports*, “Mexico’s Drug Crisis: Alternative Perspectives” [Crisis de las Drogas en México: Puntos de Vista Alternativos] (44/3) mayo-junio 2011. Howard Campbell, *Drug War Zone: Frontline Dispatches from El Paso and Juárez* [Zona de Guerra contra las Drogas: Reportes desde el Frente de Batalla en El Paso y Juárez] (Austin: University of Texas Press, 2009).

militarizada como una “Región de Alta Intensidad en Tráfico de Drogas” en términos oficiales, como parte de la Iniciativa de la Frontera Sur-Oeste durante la década de 1990. Lejos quedaban los despreocupados días del patrullaje en los estrechos de Florida sembrados de cocaína.<sup>11</sup>

De otro lado, cualquier pretensión por parte de los mexicanos de ejercer “control sobre las drogas” se vio minada por el involucramiento de altos funcionarios y familiares de Salinas en esta pujante actividad, así como en asesinatos políticos relacionados a las drogas. La interdicción de la cocaína y los intentos por evadirla multiplicaron las oportunidades de corrupción. El monto total pagado por los traficantes en sobornos se incrementó de US \$1.5-3.2 millones en 1983, a cerca de US \$460 millones en 1993, monto mayor que el presupuesto total de la PGR, y miles de agentes federales pasaron a engrasar la maquinaria de la industria de la droga. La desestabilización de la cocaína se hizo pública durante el siguiente sexenio del Presidente Zedillo (1994-2000) cuando, contrariamente a la tradición mexicana, el Presidente entrante condenó abiertamente los actos de corrupción de su predecesor. Un ejemplo de esto se produjo en 1997, al darse a conocer que el General Gutiérrez Rebollo, jefe militar de la agencia gemela de la DEA en México (dado que los servicios de inteligencia y capacitación de los EE.UU. fueron usados como modelo en la guerra contra las drogas en ese país), era en efecto un colaborador del Cártel de Juárez, un incidente que fue presentado como muestra de la corrupción en la película hollywoodiense *Traffic*. El efecto no deseado de la prolongada guerra de los Estados Unidos contra la cocaína, iniciada en la década de 1940, había venido a posarse en casa.

## CONCLUSIÓN

La guerra contra las drogas en México, declarada por el Presidente Felipe Calderón del Partido Acción Nacional (PAN) en 2007, está repitiendo, con más de 60,000 asesinatos hasta la fecha, el derramamiento de sangre presenciado en Colombia durante las décadas de 1980-90. El PRI, con copiosa ayuda por parte de los EE.UU., probablemente continuará la lucha en el norte. Institucionalizado como el Plan Colombia después del año 2000, aquella intervención inicial no melló la industria global de la cocaína, sino que meramente cambió y diversificó el mercado de las drogas ilícitas, trayéndola “a casa” de una manera más amenazante y mortífera. De la memoria histórica de estos fracasos anteriores del control prohibicionista estadounidense de las drogas, poco o nada ha quedado registrado. De hecho, la experiencia colombiana de la década de 1990 a menudo es promocionada oficialmente como un modelo “exitoso” de seguridad para el México actual. En la medida en que las cadenas productivas de la cocaína, bajo presión, están nuevamente a punto de emprender dramáticos cambios geográficos –para hacer transbordos a través de Estados tambaleantes como Honduras, con fuentes de aprovisionamiento de cocaína que se retrotraen hasta el oriente peruano, y un consumo en expansión globalizada hasta puntos tan distantes como Brasil, el Reino Unido y China—, deberíamos reconocer esta arraigada historia de fracasos provocados por efectos no deseados. Por lo menos, recientemente, muchos líderes en América Latina están empezando a reconocer este patrón. ■

---

11 Andreas, *Border Games* [Juegos de Fronteras], 55-57.